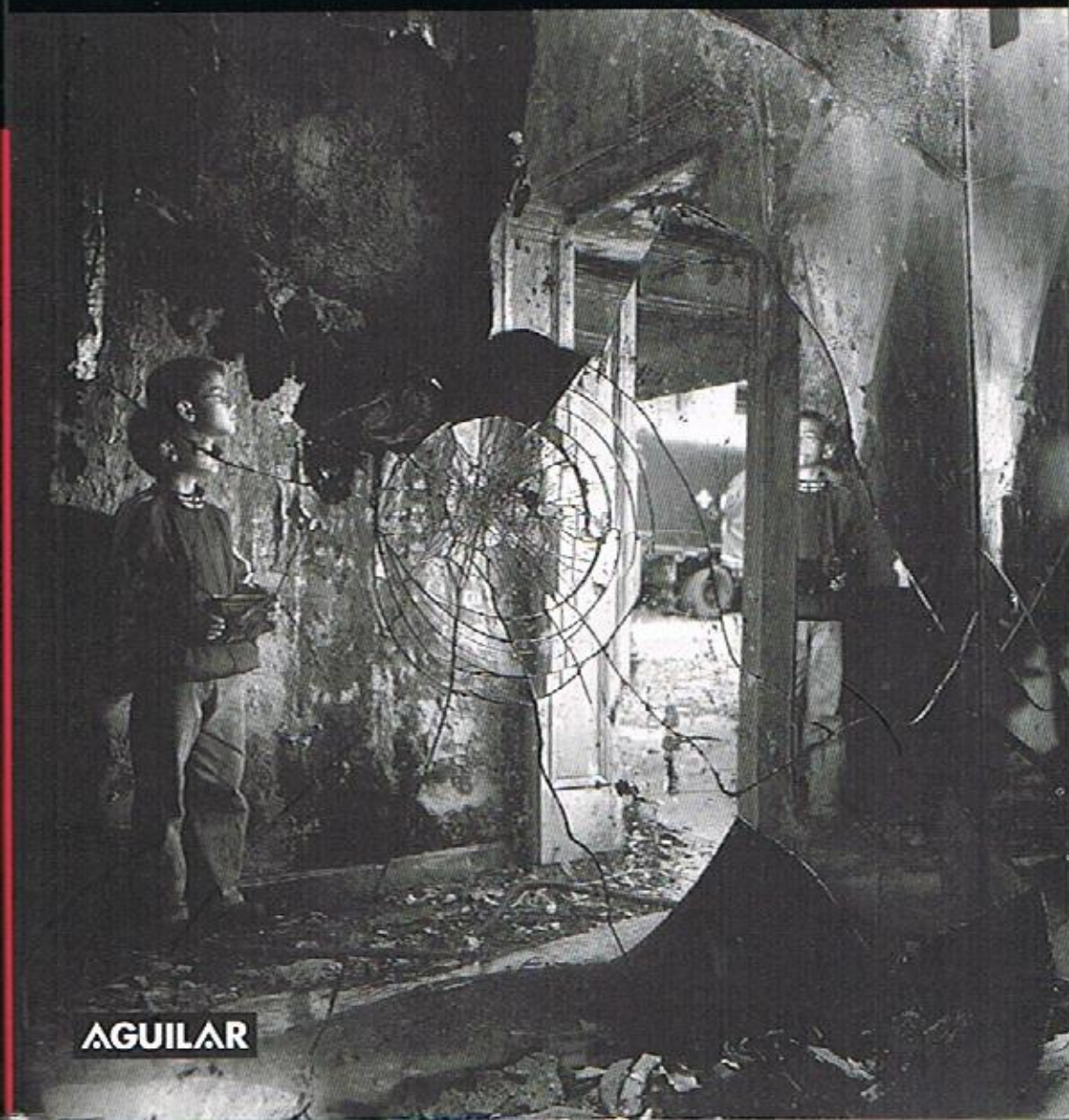


Las guerras en Colombia

Alma Guillermoprieto



Nació en 1949 en Ciudad de México. En 1978 inició su carrera periodística como reportera en América Central para el diario inglés **The Guardian** y, posteriormente, para **The Washington Post**. Más adelante, durante la década de los ochenta, fue redactora de planta del mismo periódico y jefe de la oficina para América del Sur del semanario **Newsweek**. Actualmente escribe para dos de las más prestigiosas revistas de Estados Unidos, **The New Yorker** y **The New York Review of Books**, y hace parte del consejo rector de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ha recibido varios premios a lo largo de su amplia trayectoria, entre los que se cuentan el **Maria Moors Cabot** (1990), el premio a los medios de la **Latin American Studies Association** (1992) y el premio de la **Fundación MacArthur** (1995).

**Alma
Guillermoprieto**

Este libro reúne los textos sobre Colombia que ha escrito la periodista mexicana Alma Guillermoprieto en los últimos veinte años. Fueron publicados originalmente en las prestigiosas revistas norteamericanas **The New Yorker** y **The New York Review of Books**.

«Agradezco la posibilidad que he tenido de compartir algunos momentos axiales de la terrible y maravillosa historia reciente de Colombia, y ofrezco a cambio estos ensayos y relatos. Tal vez sirvan de ayuda-memoria para los que, como yo, atravesaron esos tiempos. Y quizás les puedan recordar a los más jóvenes que en Colombia, todavía, las que ocurren son venganzas, ideologías, muertes e indiferencias viejas, y que lo que está por inventarse es un futuro distinto.»

Alma Guillermoprieto

ISBN: 978-958-704-635-9



9 789587 046359

AGUILAR

CONTENIDO

PRÓLOGO	9
I. UNA NUEVA GUERRA EN COLOMBIA	19
II. COLOMBIA: ¿VIOLENCIA SIN FIN?	45
III. LA GUERRA DE LOS MUCHACHOS	65
IV. BOGOTÁ, 1989	87
V. MEDELLÍN, 1991	111
VI. BOGOTÁ, 1993	143

IV. BOGOTÁ, 1989

*«En este país parece como si alguien
hubiera apagado la luz.»*

Entre las pocas personas que han salido ganando con el actual enfrentamiento entre el Gobierno colombiano y los traficantes de cocaína, están los vidrieros de Bogotá. El otro día, en un edificio de apartamentos que acababa de perder sus ventanas a causa de una explosión no lejos de ahí, tres equipos de vidrieros iban y venían al trote desde sus camiones hasta el edificio. Con las manos enguantadas, cargaban enormes rectángulos de vidrio que iban colocando con la ayuda de bombas de succión, encaramándose por las ventanas rotas, y casi sin tomar un respiro antes de seguir con el siguiente cristal. «Todas las mañanas ponemos la radio y esperamos la noticia», me dijo uno de ellos, «y cuando la oímos decimos "¡Uy! ¡Bombazo! ¡Hay trabajo!" Y salimos para la dirección que dieron en el noticiero. Ha habido mucha bomba, pero también hay muchos vidrieros, así que no es que sea tanto el trabajo, pero yo ya llevo como cinco o seis edificios.»

El hombre dijo que se llamaba Carlos López, y mientras él y su compañero sacaban otra lámina de vidrio del camión dijo que esperaban estar muy ocupados ese día. Habían estallado siete bombas la noche anterior, la mayoría en este barrio, que se llama Teusaquillo y es uno de los más agradables de Bogotá. Data de los años treinta, y si las casas de ladrillo rojo con techos de teja no logran el aspecto inglés

al que tan evidentemente se aspiró, la culpa es en parte de la vegetación —espléndidos sietecueros de flores púrpura en las esquinas, y begonias rojo sangre y agapantos azules apiñados en los antejardines. Hay algunos edificios modernos de apartamentos, varias sencillas iglesias de ladrillo y —una bendición en una ciudad atormentada por el ruido y la congestión— poco tráfico, aunque Teusaquillo está sólo a quince minutos del centro, donde se encuentran el Congreso, el palacio presidencial y varios ministerios. Los partidos principales y muchos políticos importantes tienen sus oficinas en Teusaquillo, de manera que, cuando los narcotraficantes decidieron lanzar un ataque contra lo que aquí se conoce como «la clase política», sólo se necesitaron ocho minutos y dos carros con varias cargas de dinamita para devastar las oficinas de nueve políticos. Como las calles no son muy anchas, las explosiones reventaron una cantidad desproporcionada de vidrio, a veces hasta a dos cuadras de las casas dinamitadas. De ahí la euforia de Carlos López al verse rodeado de edificios con gran potencial lucrativo.

Con ese modo particular que tienen los colombianos de hacerles frente a los desastres, los clientes en potencia de López —arrebujados a la entrada de sus ventilados edificios para comentar el hecho y ver cuál vidriero ofrecía el mejor precio— no estaban ni histéricos ni indignados. Una mujer que aún estaba recuperándose del susto de haber despertado unas horas antes con el ruido de detonaciones cada vez más cercanas, hasta que una, enorme, arrojó una lluvia de astillas de vidrio en su dormitorio, todavía tenía ánimo para reír al contar cómo los vidrieros habían llegado antes de las siete de la mañana, cinta en mano, a tomar medidas y ofrecer presupuestos.

Las secuelas de las primeras decenas de ataques con explosivos lanzados por los narcotraficantes, en respuesta a una ofensiva conjunta de Colombia y Estados Unidos, al menos tuvieron en común ese aire vagamente festivo. Siquie-

ra, parecía decirse la gente, las cosas no resultaron peor. Si- quiera sólo hubo vidrios rotos. No había heridos. De hecho, dados el entusiasmo y la creatividad con que los traficantes han empleado la violencia en el pasado, estas bombas no eran gran cosa; en términos colombianos, las tres últimas semanas han sido tranquilas. Tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán el 18 de agosto, y el uso, por parte del presidente Virgilio Barco, de sus facultades extraordinarias para establecer un acuerdo sobre la extradición con Estados Unidos, Bogotá se ahogaba en la depresión y el miedo. Los peores asesinatos de los últimos años han sido cometidos en nombre de Los Extraditables, una alianza ad hoc de narcotraficantes cuyo lema es «¡Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos!» ¿Qué atroz venganza se les ocurriría a los traficantes como respuesta al decreto de extradición de Barco? ¿Otro asesinato —de un ministro, quizá? ¿O una bomba en un mercado abarrotado de gente, en un cine, en un avión? Cualquiera de esas cosas puede pasar a partir de hoy, porque la Corte Suprema acaba de dictaminar que los decretos de extradición son constitucionales, pero desde el 2 de septiembre, cuando una bomba enorme causó graves daños en *El Espectador*, el diario que más se ha dedicado a denunciar el narcotráfico, no ha habido asesinatos importantes, secuestros o carrosbomba en Bogotá. Las tasas de homicidio y robo han bajado a menos del cincuenta por ciento de su nivel acostumbrado, y este interludio ha sido interpretado como una forma de comunicación por parte de los traficantes: en la amenaza suspendida y latente la gente intuye su decisión de no pasar a mayores hasta no conocer la decisión de la Corte Suprema.

Entre tanto siguen las bombas, pequeñas explosiones nocturnas. En contraste con Medellín, donde una campaña similar contra bancos y restaurantes, e incluso contra un club campestre, causó graves heridas, aquí las bombas estallan casi siempre cuando no hay peligro de que alguien

resulte herido o muerto. Tres semanas después del decreto de extradición, una de mis vecinas hizo inventario de los daños y se preguntó: «¿Esto es todo? ¿Unas cuantas bombitas?» Y cuando le pregunté a un miembro de una de las familias políticas destacadas de Colombia si la confrontación entre el Gobierno y los traficantes podría desestabilizar al Gobierno, su respuesta fue despectiva: «Esa gente ni siquiera sabe dónde poner sus bombas», dijo. «Son tan ignorantes y provincianos que nos declaran la guerra a nosotros, los de la clase dirigente, y no saben golpear donde nos duela. Ponen una bomba en el Club Campestre de Medellín porque son de Medellín, pero le garantizo que no saben dónde está el Country Club de Bogotá. Ni siquiera saben que existe».

Este hombre piensa que la organización de los traficantes se está desmoronando, y en realidad hay pruebas de que las operaciones de uno de los traficantes más sanguinarios y más buscados, Gonzalo Rodríguez Gacha, que tiene su sede en Bogotá, están casi desmanteladas. Pero no hay indicios de que los narcotraficantes, como grupo, se hayan visto seriamente afectados en su capacidad ofensiva. Las bombas de Teusaquillo parecen más bien una respuesta deliberada y despiada a la ofensiva antidroga Barco-Bush: los traficantes simplemente decidieron ignorar las tácticas confrontacionales del Gobierno, y optaron por su propia versión de una guerra de baja intensidad, con golpes de bajo costo y poco riesgo contra casi todos los sectores de la vida pública. Han volado subestaciones de teléfono: una vez quedaron fuera de servicio más de cuatro mil líneas. Las cajas de ahorro gubernamentales han reforzado la vigilancia, pero se les sigue atacando. Los cines están más vacíos ahora, después de que una pequeña bomba estallara en el baño de hombres de una sala de barrio. Hubo una escalada terrorista la semana pasada, cuando una bomba en la ciudad turística de Cartagena mató a dos médicos que asistían a una convención. Aquí, una serie de bombas que reventaron el fin de

semana en escuelas públicas ha mantenido a los niños en sus casas mientras se hacen las reparaciones.

La relativa mesura —la delicadeza, incluso— exhibida por los narcotraficantes al escoger sus blancos presenta un marcado contraste con su uso indiscriminado de la violencia en los meses anteriores al asesinato de Galán. Al fin de cuentas, éste es el año que empezó con un desafío directo al Gobierno, cuando dos jueces investigadores y diez miembros de su equipo fueron emboscados y ejecutados, en el curso de una investigación sobre asesinatos rurales relacionados con la droga. Los jueces pertenecían a los Tribunales de Orden Público, creados por el Gobierno el año pasado tras la muerte del procurador general, Carlos Mauro Hoyos, y dotados de poderes especiales para investigar y sentenciar crímenes relacionados con la droga y la guerrilla. Los Tribunales de Orden Público habían tenido cierto éxito al abrir casos y formular acusaciones contra los principales traficantes. Por su parte, el ejército y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, sección de la policía encargada de inteligencia) adelantaban una ofensiva excepcionalmente vigorosa contra los grandes laboratorios de cocaína. Los narcotraficantes reaccionaron. En mayo, aunque el general Miguel Maza Márquez, director del DAS, escapó milagrosamente con vida de un atentado con carrobomba, murieron otras seis personas. En julio, otro carrobomba mató al gobernador del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Posteriormente, ese mismo mes, vino el asesinato de un juez de orden público que había dictado auto de detención contra Pablo Escobar, el capo de la droga en Medellín, en relación con varios asesinatos masivos cometidos el año pasado. Esa noche, cuando el presidente Barco se preparaba para salir al aire con el fin de anunciar una serie de medidas drásticas contra el comercio de cocaína, incluida la resurrección de los procedimientos de extradición, y un decreto de expropiación contra las lujosas casas y haciendas ganaderas de los

traficantes, Galán, claro favorito entre seis pretendientes a la candidatura del Partido Liberal, y predilecto del propio Barco, fue abatido durante un acto de campaña en las afueras de Bogotá.

La opinión pública le achacó inmediatamente el crimen a Escobar, y aquellos bogotanos con cualquier grado de prestigio social o político, dinero, o influencia intelectual, se pasaron los días siguientes repasando cada detalle y cada rumor, en un intento de comprender por qué Escobar había decidido matar a Galán en ese momento específico, con la esperanza de hallar así la respuesta a una segunda pregunta más apremiante: ¿Sigo yo? Fueron semanas odiosas de expectativa, pero en la calma chicha que las reemplazó surgieron dos preguntas más: ¿Qué tanto se han visto afectados los traficantes por la ofensiva? ¿Qué golpes darán ahora?

La explicación mejor armada del asesinato de Galán es que fue planeado a solas por Pablo Escobar («uno de los 20 hombres más ricos fuera de Estados Unidos, de acuerdo con *Fortune*», según se sienten obligados a recordar siempre los reporteros), de quien se dice que tiene cierta obsesión por la venganza. Se afirma que ha sido incapaz de olvidar que fue el movimiento político de Galán el que lo expulsó del Congreso en 1984.

Galán, que en privado era un hombre discreto y conciliador, era también escrupulosamente honesto, y como resultado se halló a veces en situaciones que le exigieron desempeñar el papel de agitador o de rebelde. En el Congreso, su magnífica cabeza leonina y su oratoria decimonónica tenían buen impacto, y, como en ocasiones era pragmático y a veces complaciente, habría ascendido velozmente en las filas del Partido Liberal si no se hubiese pasado el final de los años setenta denunciando la creciente corrupción y compinchería de su partido. Finalmente rompió con las directivas del partido en 1980, y junto con otros políticos jóvenes e inteligentes fundó una disidencia llamada Nuevo Liberalismo.

Uno de los cofundadores fue Rodrigo Lara Bonilla, otro senador. Para esas fechas, Escobar ya había logrado comprar mucha buena voluntad en Medellín; financiaba la construcción de casas en terrenos de invasión, y pagaba los entierros del barrio y los uniformes de los equipos de fútbol. En 1982, con el patrocinio de un influyente senador, Alberto Santofimio, ingresó al Partido Liberal y se candidatizó al Congreso como suplente por el departamento de Antioquia. El principal, Jairo Ortega, obtuvo una fácil victoria, gracias, tal vez, a los generosos aportes de Escobar a su campaña. Cuando Lara Bonilla fue nombrado ministro de Justicia, en 1983, lanzó una investigación sobre aportes ilegales a las campañas políticas, y se centró especialmente en Ortega y Escobar. Poco después, *El Espectador* publicó un informe donde se revelaba que Escobar había sido detenido en 1976 por tráfico menor de cocaína, y fue desautorizado públicamente por su antiguo patrocinador, Santofimio. Menos de dos años después de su elección, Escobar se vio forzado a retirarse de la vida pública. Unos meses después, Lara Bonilla fue asesinado.

Según la interpretación revanchista de la historia colombiana reciente, el asesinato de Galán fue simplemente un acto del implacable Escobar para eliminar a otro miembro del Nuevo Liberalismo, aunque una especie de subrumor añade que Escobar se había oído el plan del presidente Barco para revivir el proceso de extradición y había resuelto combinar la venganza del pasado con la del presente en un solo golpe: contra el hombre que había ayudado a deshonorarlo, contra el programa de Barco, y contra el candidato escogido y presunto sucesor del presidente.

Ésta es una versión tranquilizadora para la mayoría de los que se preguntan si figuran en una lista de víctimas, porque en este momento quedan vivos apenas media docena de fundadores del Nuevo Liberalismo —entre ellos el antiguo ministro de Justicia y embajador en Hungría, Enrique

Parejo González, quien sobrevivió en 1987 a un atentado contra su vida en Budapest, y la viuda de Galán, Gloria Pachón, quien siguió recibiendo amenazas de muerte cada media hora después del asesinato de su marido, y que se va de Colombia como enviada ante la Unesco.

Hay también un corolario importante y optimista a la teoría de la venganza, que sostiene que Escobar, además de actuar solo al ordenar el asesinato de Galán, lo hizo contra el sabio consejo de los patriarcas del comercio de la droga, el clan de los Ochoa. Cuando los miembros de la «clase dirigente» alegan que no todos los exportadores de droga son lo mismo, invariablemente mencionan que los hermanos Ochoa —Juan David, Jorge Luis y Fabio Junior— provienen de «una buena familia antioqueña», con lo que quieren decir, entre otras cosas, que se puede confiar en los Ochoa para tomar decisiones empresariales sensatas. Aunque últimamente han estado en guerra con otros traficantes —los hermanos Rodríguez Orejuela, basados en Cali, quienes controlan la mayoría de los embarques de cocaína a Nueva York— corre el rumor de que los Ochoa y los Rodríguez Orejuela tienen ganas de entablar pláticas entre sí y con el Gobierno, porque Escobar sigue ordenando asesinatos y las consiguientes represalias del Gobierno son malas para el negocio. La muerte extravagante y particularmente innecesaria de Galán, quien no era juez ni cruzado de la extradición, agotó la paciencia de los Ochoa y de los comerciantes de Cali. Escobar y Rodríguez Gacha andan escondidos, abandonados por sus colegas y con un precio de 250.000 dólares por sus cabezas. El rumor concluye que la prueba más sólida de que el Gobierno, los Ochoa y los comerciantes de Cali tienen una especie de arreglo, es que el Gobierno ofrece su cuarto de millón de dólares por Escobar y por Rodríguez Gacha, y por nadie más.



La idea de que todo el problema actual se deba a un par de traficantes salidos de madre, podría interpretarse, en sí, como una especie de victoria para el Gobierno; a falta de una caída en la demanda mundial de cocaína, o de un golpe de relaciones públicas como la captura de un traficante importante, resulta difícil saber qué otra cosa constituiría un logro palpable en la actual ofensiva. Era más fácil al principio, inmediatamente después del asesinato de Galán, cuando el temor tenía su contrapeso en la emoción de ver operaciones vastas y bien dirigidas contra las propiedades de los traficantes. Todas las noches salían en las noticias sus bañeras revestidas de oro y pianos blancos de cola, sus juegos de sala de acrílico transparente y castillosseudomedievales, y se hacía la cuenta diaria de la superficie total de las haciendas confiscadas. El presidente de Estados Unidos hizo un discurso de Estado sobre el tema de las drogas, y se le dio cobertura detallada a la captura y extradición a Atlanta, Georgia, de un lavador de dinero de poca importancia. Pero nada de esto ha contribuido a aumentar la popularidad del presidente más débil en la historia colombiana reciente, y pese a la decisión a su favor de la Corte Suprema esta noche, parece difícil que Barco logre un mandato para seguir una guerra con tantas bajas civiles. No he hablado con un solo colombiano, sea cual fuere su clase social o su filiación política, que crea que los narcotraficantes puedan ser derrotados permanentemente mientras Estados Unidos siga suministrando un mercado. Frente a esta invencibilidad percibida, ¿cómo puede el hombre a quien la revista *Semana* —la de mayor circulación— describió como «el peor comunicador entre los jefes de Estado contemporáneos» convencer a alguien de que vale la pena pagar el costo de la guerra —las bombas, los asesinatos, el miedo generalizado—?

Barco, un hombre de canas lacias y voz exigua, está singularmente mal dotado para la vida pública; cuando se pierde de vista —lo que sucede a menudo— se le critica,

cuando habla provoca sarcasmo. Cuando trata de parecer alegre parece burlón y cuando es serio suena regañón. Ni siquiera las virtudes que de mala gana se le reconocen —indiscutiblemente es honrado, perseverante, meticoloso— inspiran afecto. Curiosamente, fueron sus puntos flacos los que le ayudaron en la campaña presidencial; como alcalde de Bogotá, su fama de excelente administrador sin gusto por la politiquería agradó a un electorado cansado de la simpatía efervescente y de las aparatosas iniciativas políticas del presidente Belisario Betancur; Barco hizo de hormiga sabia frente al saltamontes de Betancur. Pero tres años en el poder no han aumentado la eficacia política de Barco. No ha sido capaz de aglutinar a los miembros de su gabinete, y después de la mal manejada renuncia/destitución de su ministra de Justicia, Mónica de Greiff, hace dos semanas, y los barruntos de inconformidad del ministro de Gobierno por el asunto de la extradición, le toca buscar a un noveno ministro de Justicia y a un quinto ministro de Gobierno. Tampoco ha demostrado aptitud para las prebendas que debe saber repartir un presidente para mantener contento a su partido en el Congreso, y a menos de diez meses de dejar el poder tiene el sol a sus espaldas. Barco tiene que darse por bien servido, por lo tanto, de que cuando la ofensiva antidroga parecía perder impulso, la Corte Suprema haya superado su aversión histórica a las medidas de extradición y le haya concedido la que hasta la fecha es su mayor victoria política. Al fallar hoy a favor de la extradición, la Corte entró en contradicción con todas sus decisiones anteriores y demostró, según me dijo un feliz columnista de *El Espectador*, que «la Corte ya no le está sacando el cuerpo a la crisis de la droga».

Para aprobar la extradición, el Gobierno colombiano tuvo que ignorar su propia legislación anterior al respecto y autorizar el juicio, la sentencia y el encarcelamiento de sus ciudadanos en un país extranjero. Estados Unidos quiere

un tratado de extradición por razones lógicas y de peso: en Estados Unidos existe una montaña de cargos contra los narcotraficantes más conocidos, mientras que en Colombia de hecho los cargos no existen. Son pocos los traficantes capturados aquí, y ninguno ha sido detenido más de unas semanas; la única figura colombiana importante encarcelada actualmente es Carlos Lehder, quien fue capturado en 1987 —justamente antes de que se viniera abajo el último tratado bilateral de extradición— y llevado en secreto a Florida, donde lo sentenciaron a prisión perpetua más 135 años, sin libertad condicional.

Los argumentos colombianos contra la extradición no son tan nítidos, y, como vienen arrojados en un intenso nacionalismo, provocan la impaciencia de muchos interlocutores estadounidenses. El primer argumento —defendido durante largo tiempo por conservadores como Betancur— es sencillamente el de que los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados en su propio país. Hay otros, sutiles y menos populares: por ejemplo, que la debilidad histórica de Colombia ha sido la carencia de un Estado central vigoroso capaz de imponer el imperio de la ley a su población, y que, al evadir esa obligación mediante la extradición, el Gobierno abriría una era de anarquía más cruda y sangrienta que todas las conocidas en el pasado. Otro, invocado por estudiosos del mercado de la cocaína, es que la captura de cualquier traficante de envergadura —o incluso de todos ellos— no tendría ningún efecto a largo plazo en la producción de cocaína; que el problema de la cocaína en Estados Unidos se resolverá sólo cuando sus ciudadanos dejen de consumirla, y que es arrogante por parte del Gobierno de Estados Unidos exigir una medida que produce tan escasos resultados y tantos sufrimientos a un país del que, por lo demás, se ocupa tan poco.

Pero nadie se atrevió a criticar la extradición al día siguiente de la muerte de Galán. Todos parecían coincidir en

un tratado de extradición por razones lógicas y de peso: en Estados Unidos existe una montaña de cargos contra los narcotraficantes más conocidos, mientras que en Colombia de hecho los cargos no existen. Son pocos los traficantes capturados aquí, y ninguno ha sido detenido más de unas semanas; la única figura colombiana importante encarcelada actualmente es Carlos Lehder, quien fue capturado en 1987 —justamente antes de que se viniera abajo el último tratado bilateral de extradición— y llevado en secreto a Florida, donde lo sentenciaron a prisión perpetua más 135 años, sin liberad condicional.

Los argumentos colombianos contra la extradición no son tan nítidos, y, como vienen arrojados en un intenso nacionalismo, provocan la impaciencia de muchos interlocutores estadounidenses. El primer argumento —defendido durante largo tiempo por conservadores como Betancur— es sencillamente el de que los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados en su propio país. Hay otros, sutiles y menos populares: por ejemplo, que la debilidad histórica de Colombia ha sido la carencia de un Estado central vigoroso capaz de imponer el imperio de la ley a su población, y que, al evadir esa obligación mediante la extradición, el Gobierno abriría una era de anarquía más cruda y sangrienta que todas las conocidas en el pasado. Otro, invocado por estudiosos del mercado de la cocaína, es que la captura de cualquier traficante de envergadura —o incluso de todos ellos— no tendría ningún efecto a largo plazo en la producción de cocaína; que el problema de la cocaína en Estados Unidos se resolverá sólo cuando sus ciudadanos dejen de consumirla, y que es arrogante por parte del Gobierno de Estados Unidos exigir una medida que produce tan escasos resultados y tantos sufrimientos a un país del que, por lo demás, se ocupa tan poco.

Pero nadie se atrevió a criticar la extradición al día siguiente de la muerte de Galán. Todos parecían coincidir en

que una situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias, y era claro que Barco tenía una oportunidad singular de lograr una decisión favorable de la Corte Suprema, la cual —independientemente de las muchas amenazas en su contra y del asesinato de uno de sus miembros— históricamente había mirado con recelo la extradición. Se dice que Barco —siempre tan remoto— se tomó la insólita molestia de tantear a la Corte antes de jugarse el futuro político con los decretos de emergencia. «Tengo entendido que consultó y que le dijeron que los decretos no serían rechazados», me contó un experto legal con amigos en la Corte. Cuando el último tratado bilateral de extradición con Estados Unidos fue derogado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a comienzos de 1987, se produjo una pausa en las horrendas matanzas con que los traficantes habían tratado de intimidar a los partidarios de la extradición. Cuando, después de la muerte de Galán, el presidente Barco anunció que estaba traspasando los límites constitucionales al reinstaurar a título personal los procedimientos de extradición para los traficantes, la respuesta fue la bomba de *El Espectador* —cuyo director anterior, Guillermo Cano, hizo campaña a favor del tratado de extradición y en consecuencia fue asesinado en diciembre de 1986.



Ahora, mientras esperamos la reacción de los exportadores de cocaína, queda pendiente una pregunta: aun con el respaldo de la Corte Suprema, ¿tendrá Barco el vigor político para comandar la guerra que le declaró al narcotráfico? A falta de respaldo popular, necesita el apoyo de un Gobierno fuerte, pero las instituciones gubernamentales en Colombia son notoriamente frágiles.

A las tres semanas de la gran ofensiva de Barco, su ministro de Gobierno, Orlando Vásquez Velázquez, quiso pronunciar un discurso ante la Cámara de Representantes, con

el fin de explicar los decretos antidroga de emergencia y obtener un voto de confianza por parte de los representantes. Cuando llegó a pronunciar su anunciado discurso encontró cerradas las puertas de la Cámara. Por sugerencia de su vicepresidente, los representantes habían hecho un apresurado mutis para aplazar así un debate sobre el delicado tema de las drogas.

«Es un mal momento para juzgar las capacidades del Estado porque nos encontramos en el final de una administración», reflexionó el decano de una facultad de derecho días después del incidente en el Congreso. «Por supuesto, eso significa que no es el mejor momento para desatar una ofensiva importante y riesgosa. Pero también hay limitaciones que nada tienen que ver con la efectividad del presidente mismo. La rama legislativa, por ejemplo, es inútil. Está asustada, y cuando toda una rama del Estado muestra que está intimidada la cuestión es muy seria. Pero, desgraciadamente, éste es un problema crónico que no ha de resolver Barco: el Congreso es ineficaz desde hace veinticinco años.» Pero el decano reconoce que, incluso para los modestos antecedentes de la Cámara, el amedrentado boicot al alegato contra las drogas del ministro resulta inaudito. También es cierto, añadió, que la rama judicial es impotente. «Está postzada; carece de la más mínima capacidad de reacción.» En esto no había exageración; se calcula que el ochenta por ciento de los delitos se quedan sin investigación por falta de personal y de recursos. De los demás, un millón setecientos mil casos se quedan sin sentencia cada año. Sólo se falla en el tres por ciento de los casos. Los 25.000 empleados judiciales del país no sólo están mal pagados y sobrecargados de trabajo; también están aterrorizados. 125 de ellos, incluidos 35 jueces, fueron asesinados el año pasado. Con un salario inferior a 400 dólares mensuales, no todo juez de circuito puede darse el lujo de un guardaespaldas.

En opinión del decano, la alta tasa de mortalidad judicial es prueba de que el sistema no es fundamentalmente

corrupto. Con una capacitación adecuada para los jueces, un salario decoroso, mejor protección física y computadores y otros equipos indispensables para una investigación criminal eficiente, los tribunales podrían avanzar significativamente contra la abrumadora impunidad del narcotráfico. Pero, dados los aprietos económicos del Gobierno colombiano, éste depende casi exclusivamente de Estados Unidos para financiar mejoras en su sistema judicial. Del paquete de ayuda de 65 millones de dólares anunciado el mes pasado por el presidente Bush, casi el ochenta y cinco por ciento está previsto para el ejército, y el resto para la policía. Una donación adicional de 5 millones de dólares, otorgada esta primavera, se dedicó principalmente a protección de emergencia para los jueces —chalecos y autos blindados— pero la ayuda es apenas más que simbólica; hay más de cuatro mil jueces en Colombia, y la asociación de trabajadores de la justicia, Asonal, calcula que uno de cada cinco está amenazado. A 35.000 dólares por carro blindado, costaría unos 30 millones darles protección a todos. Dadas las circunstancias, el decano de la facultad no podía más que pensar que si se pudiera convencer a los traficantes de Cali y el clan Ochoa de entregar los cadáveres de Rodríguez Gacha y Escobar, el país se daría por bien servido. Como todo el mundo, pensaba que no se podrá hablar de la eliminación del tráfico de cocaína mientras la voraz demanda de Estados Unidos y Europa siga creando un mercado. «Ningún gobierno democrático puede erradicar completamente el crimen», dijo. «Pero puede reducir la inmoralidad a dimensiones tolerables. El Gobierno puede darle golpes significativos al crimen, podrá acabar con dos o tres traficantes grandes. El comercio seguirá existiendo, pero podremos controlar sus efectos destabilizadores en la sociedad, en la economía y en la vida política. El problema es que la criminalidad del narcotráfico se ha vuelto incontrolable. Existe la voluntad de domeñarlo, sin embargo, y creo que, a pesar de todo, las ramas judicial y ejecutiva tienen el poder para hacerlo.»

Esto es lo que podría denominarse el «nuevo pragmatismo» de la élite del poder, y uno de sus problemas es que reduce a retórica la idea de una ofensiva contra la droga, mientras que los narcotraficantes se la juegan siempre con una política de todo o nada. Por supuesto, hay mucha gente, incluidos antiguos miembros del Gobierno de Barco, que piensan que la actual ofensiva es retórica, tanto por parte de Colombia como de Estados Unidos. George Bush declara la guerra a las drogas y envía 55 millones de dólares en equipos militares inadecuados y de desecho. El ejército colombiano emprende una ofensiva y es incapaz de dar un solo golpe significativo contra los exportadores de cocaína basados en Cali, que casi seguramente son los que más cocaína llevan a Estados Unidos. «Esto es absurdo, completamente absurdo», decía un antiguo asesor del presidente Barco. «Todo esto —los decretos de emergencia, los asesores gringos, la ofensiva militar, los riesgos políticos— ¿sólo para agarrar a Escobar y a Rodríguez Gacha?»



«¿Sabes lo que realmente me revienta?», estalló hace un par de semanas una periodista amiga mía de *El Espectador*. Estábamos viendo a un locutor de televisión cuando anunciaba que en Washington la DEA —Drug Enforcement Administration— acababa de confirmar la extradición de un lavadólares de medio pelo, capturado aquí en los primeros días de la ofensiva. Ante la perspectiva de una retaliación inmediata se les había aconsejado a los redactores del periódico que se encerraran. «Lo que realmente me mata», explicaba mi amiga, debidamente guarecida, «es que ahora estamos clavados con la política de extradición, gústenos o no, y a falta de una política mejor comprometimos nuestro honor en defenderla. Tú sabes perfectamente bien que alguien va a morir, que va a pasar algo espantoso como resultado de la extradición de esta noche, que ni siquiera es de un

personaje importante. Y toda esa destrucción ocurrirá sólo para que Estados Unidos se dé el gusto de un juicio simbólico, aunque sea el de un pobre diablo que no vale la pena.»

La carga visceral de esta reacción es típica. El sentimiento antiyanqui no es abierto aquí (como dice el dicho, «Desde Miami se ve el cielo»), pero es una constante inflamable en el temperamento nacional. (No hay que olvidar que éste es el país que perdió el istmo de Panamá en un levantamiento instigado por Estados Unidos.) Ha habido trifulcas y pedreas fomentadas por la izquierda contra la extradición y, después de que la prensa filtrara los nombres de congresistas a los que ya no se les permite entrar a Estados Unidos —incluidos los antiguos patrocinadores de Escobar, Alberto Santofimio y Jairo Ortega—, ha habido una serie de furiosos contraataques por parte de los afectados, en los que se acusa a la CIA y a la DEA de la muerte de Galán. Estas manifestaciones no llegan muy lejos, pero si la rabia antiyanqui se convierte por primera vez en un tema de campaña electoral en Colombia, en gran parte será porque los colombianos piensan que le están torciendo el brazo a su Gobierno en el asunto de la extradición.

Por ahora es difícil imaginar cómo podrá haber campaña alguna. ¿Qué harán los desmoralizados electores frente al cúmulo de candidatos —supuestos adalides de la esperanza que más bien parecen víctimas de la psicosis de guerra? Está, por ejemplo, el cortés candidato conservador Diego Pardo Koppel, cuya sede fue la más afectada la noche de las bombas en Teusaquillo, y cuyo secretario privado, Álvaro López Acevedo, ha recibido «unas nueve» amenazas de muerte por teléfono desde el asesinato de Galán. Sentado entre los escombros a la mañana siguiente de la explosión, López afirmó que la campaña senatorial de Pardo Koppel continuaría, pero cinco minutos después, sin parecer darse cuenta de la contradicción, dijo que «por el momento no hay clima para una campaña política». ¿Cómo emprenderá Pardo una campaña si es imposible adelantarla?

personaje importante. Y toda esa destrucción ocurrirá sólo para que Estados Unidos se dé el gusto de un juicio simbólico, aunque sea el de un pobre diablo que no vale la pena.»

La carga visceral de esta reacción es típica. El sentimiento antiyanqui no es abierto aquí (como dice el dicho, «Desde Miami se ve el cielo»), pero es una constante inflamable en el temperamento nacional. (No hay que olvidar que éste es el país que perdió el istmo de Panamá en un levantamiento instigado por Estados Unidos.) Ha habido trifulcas y pedreas fomentadas por la izquierda contra la extradición y, después de que la prensa filtrara los nombres de congresistas a los que ya no se les permite entrar a Estados Unidos — incluidos los antiguos patrocinadores de Escobar, Alberto Santofimio y Jairo Ortega —, ha habido una serie de furiosos contraataques por parte de los afectados, en los que se acusa a la CIA y a la DEA de la muerte de Galán. Estas manifestaciones no llegan muy lejos, pero si la rabia antiyanqui se convierte por primera vez en un tema de campaña electoral en Colombia, en gran parte será porque los colombianos piensan que le están torciendo el brazo a su Gobierno en el asunto de la extradición.

Por ahora es difícil imaginar cómo podrá haber campaña alguna. ¿Qué harán los desmoralizados electores frente al cúmulo de candidatos — supuestos adalides de la esperanza que más bien parecen víctimas de la psicosis de guerra? Está, por ejemplo, el cortés candidato conservador Diego Pardo Koppel, cuya sede fue la más afectada la noche de las bombas en Teusaquillo, y cuyo secretario privado, Álvaro López Acevedo, ha recibido «unas nueve» amenazas de muerte por teléfono desde el asesinato de Galán. Sentado entre los escombros a la mañana siguiente de la explosión, López afirmó que la campaña senatorial de Pardo Koppel continuaría, pero cinco minutos después, sin parecer darse cuenta de la contradicción, dijo que «por el momento no hay clima para una campaña política». ¿Cómo emprenderá Pardo una campaña si es imposible adelantarla?

¿Y cómo responderán los electores a la candidatura presidencial de César Gaviria, antiguo ministro de Gobierno y coordinador de la campaña de Luis Carlos Galán, quien sollozó en el funeral de su candidato y lo remplazó un mes después del asesinato? Gaviria es un administrador eficiente, y hábil político de entretelones, pero le falta por completo el arraigo popular de su antecesor. ¿Se les está pidiendo a los seguidores de Galán que voten por su fantasma? ¿Lo harán?

Podrían votar en cambio por el habitualmente jocundo Ernesto Samper, también del ala reformista del Partido Liberal. Se ha sosegado un tanto desde marzo pasado, cuando nueve balas lo mantuvieron hospitalizado durante dos meses con una septicemia casi fatal, pero dice que el hecho de estar vivo reivindica toda una vida de optimismo. Sin embargo últimamente se le ve más solemne —casi sombrío— y al contemplar su equipo de campaña, su aparato de seguridad y su pasado reciente, sus posibles electores podrían caer también en un cierto desánimo.

Hace ocho meses Samper esperaba la salida de un vuelo nacional en el aeropuerto de Bogotá. Alcanzó a ver en otra fila a José Antequera, representante en el Congreso por la ciudad de Barranquilla. Antequera, miembro de la izquierdista Unión Patriótica, gozaba de la estima de muchos políticos conservadores y liberales. Era de mente abierta, pragmático, excepcionalmente inteligente y dueño de un esencial talento político para forjar alianzas. En momentos en que, según todas las evidencias, casi 800 miembros de su partido habían caído a manos de los narcoparamilitares de ultraderecha financiados por Gonzalo Rodríguez Gacha, Antequera estaba tratando de proteger a la Unión Patriótica, distanciándola de sus orígenes guerrilleros y reforzando sus nexos parlamentarios con otros partidos. La estrategia estaba dando frutos, pero cuando Samper fue a saludarlo en el aeropuerto le pareció que estaba tenso. «Me contó que estaba seriamen-

te amenazado», me dijo Samper en una tarde reciente. «Y que iba a Barranquilla a descansar porque andaba muy angustiado. Me estaba diciendo esto cuando sonaron los primeros tiros.» Un sicario estaba vaciando su ametralladora en Antequera, y una ráfaga traspasó a Samper en el bajo vientre. Lo salvó su esposa Jacquin, quien se tendió sobre él y le gritó a un atónito guardaespaldas: «¡Mate al sicario!», que así lo hizo. Antequera estaba ya muerto, pero Samper, quien vio que le sangraba un dedo y pensó que sólo lo habían herido en la mano, se aferraba a la vida. Su esposa lo arrastró detrás del mostrador, sobre la correa de los equipajes, y luego a la pista, donde paró una camioneta del aeropuerto y le dijo al conductor que corriera al hospital más cercano.

Cuando lo dieron de alta, Samper reanudó su campaña. Horacio Serpa, quien, a causa de sus enérgicas denuncias contra los narcoparamilitares, es uno de los hombres más seriamente amenazados en Colombia, renunció a su cargo de procurador general para colaborar en la campaña de Samper. Esta semana, Mónica de Greiff, quien como ministra de Justicia recibió amenazas meticulosamente detalladas contra ella y su familia, anunció que se incorporaría al equipo. Cuando Samper y Serpa van de campaña, como lo hicieron esta semana, usan chalecos antibala y están protegidos por un cuerpo de seguridad de más de 400 hombres. Samper suele decir de broma que en la actual campaña no se trata de ganar la candidatura del Partido Liberal, sino de sobrevivir para reclamarla, y bien podría añadir que los votantes podrán optar no tanto por el candidato que más les gusta, sino por el que les parezca que tiene mayores posibilidades de seguir vivo hasta el final de sus cuatro años de mandato.

Hace dos semanas, cuando Samper llegó a la sede de su campaña para una entrevista, fue precedido por un guardaespaldas que hizo esperar al candidato mientras él reco-

rria todos los cuartos de la casa, pistola automática en mano, en busca de desconocidos. Cuando terminó su cateo, un segundo guardaespaldas inspeccionó la oficina del candidato, buscando bombas en los armarios y debajo de los cojines del sofá. Finalmente entró Samper, y un guardaespaldas cerró la puerta y se quedó vigilando en el vestíbulo.

«Es muy difícil», reconoció Samper con un suspiro. «Tu- vimos que cambiar de sede este mes porque recibimos se- rias amenazas de que iban a ponerle una bomba, y la casa anterior quedaba en una esquina expuesta. Fue difícil en- contrar a alguien que quisiera arrendarnos una casa. Estas últimas semanas he sentido por primera vez que la gente tiene miedo a acercárseme porque soy un político. Los ve- cinos de mi edificio quisieran que me fuera, y yo los entien- do. Lo primero que ven sus hijos cuando van al colegio por la mañana es a seis hombres armados de ametralladoras. ¡Por supuesto que les da miedo!» En cuanto a la campaña misma, ahora que los candidatos han acordado limitar al mínimo los actos al aire libre, Samper dijo: «Es casi imposi- ble conseguir que alguien nos alquile un salón. Mi mujer y yo decidimos hacer una subasta de arte para financiar la campaña, y alquilamos el Gun Club», un elegante club priva- do. «Pagamos, por supuesto, y firmamos un contrato y llena- mos todos los demás requisitos. Pero el día anterior alguien llamó, y dijo que estaba enterado de la subasta y que iban a poner una bomba. Cuando el Gun Club nos canceló, les dije que estaban cometiendo un acto profundamente anti- democrático. A último momento hicimos la subasta en otra parte, y por supuesto que fue un completo fracaso. Así, ¿có- mo va a poder alguien como yo, odiado por los narcotrafican- tes y no particularmente estimado por los grandes intereses, financiar una campaña en este país, si no puedo ni siquie- ra alquilar un salón?»

Le dije a Samper que me parecía que no andaba muy optimista. Discrepó. «No se puede aspirar a la presidencia y

ser pesimista», dijo. «Yo no ando detrás del martirio. Creo que puedo ganar, y creo que sé lo que toca hacer. En Colombia todavía hay reservas morales, institucionales y económicas a las que se puede apelar. Pero no cabe duda de que nos enfrentamos a una gran tarea. El problema es que dejamos que la violencia y el narcotráfico llegaran demasiado lejos antes de reaccionar. Así como en Estados Unidos hay una predisposición a tolerar a los drogadictos, también ha habido entre nosotros un clima de tolerancia con los traficantes —una cierta predisposición a convivir con ellos».

Y queda el problema inmediato de lograr que los votantes superen el miedo. «La gente está asustada», dijo. «En este país parece como si alguien hubiera apagado la luz.»

Samper ha adquirido conciencia del ambiente depresivo en la medida en que es sensible a los cambios de ánimo de la clase media, una base natural de apoyo que antes compartía con Galán. El país ha disfrutado en estos años de un *boom* en la construcción, y de una expansión fenomenal en el sector de servicios de lujo —restaurantes, boutiques, peluquerías y agencias de viajes—, que benefició a las clases en ascenso. Todo esto se financió en gran parte con dinero de la droga, mientras que las actividades más sórdidas del tráfico —asesinatos en masa de campesinos de izquierda, guerra de pandillas, corrupción de las instituciones gubernamentales— escasamente afectan a la clase media, cuya reacción en el pasado ante el problema de la droga abarcó todos los matices de la indiferencia. Pero el asesinato de Galán y las balas que accidentalmente casi matan a Samper, desconcertaron a sus seguidores, y develaron las implicaciones del terror a gente que antes no tenía razón para considerarse blanco, y por lo tanto enemigo, de los exportadores de droga. Al funeral de Galán asistió una multitud, en una rara explosión de indignación colectiva de la clase media, pero no está nada claro cómo reaccionará este sector decisivo de la población si se desata una campaña

de terror sin ambages —y con muertos— ahora que el decreto de extradición ha sido ratificado. La reacción de la clase media será una especie de indicador, y reforzará o bien al solitario Barco, o a los que quisieran que el ejército jugara un papel más importante en las decisiones gubernamentales o, por el contrario, a gente como el alcalde de Medellín, un conservador que cree que mientras no se legalice el narcotráfico es necesaria alguna forma de arreglo con los traficantes. El alcalde Juan Gómez Martínez no está solo en su opinión: el presidente de la Cámara de Representantes, tras haber anunciado que siempre había favorecido el diálogo —«incluso con mis enemigos»—, dejó saber discretamente el mes pasado que había tenido dos conversaciones telefónicas «breves, respetuosas y sin amenazas» con Rodríguez Gacha y Escobar sobre el tema de un posible acuerdo. Cómo lograr un arreglo frente a la vehemente oposición de Estados Unidos es una pregunta que no se hace, pero se habla, por ejemplo, de un acuerdo que le permitiría a los narcotraficantes afrontar juicio por delitos menores a cambio de poder colocar su dinero —tan necesario— en la economía legal.

Las calles y los restaurantes en esta ciudad, que normalmente ama la noche, están tan vacías que bien podría haber toque de queda, y cuando oscurece, la tensión se siente aun en el silencio. Puede pasar cualquier cosa a partir de hoy: muertes, arrestos y extradiciones importantes, ineptias del presidente. Pero lo que también puede ocurrir en los próximos meses es que Colombia siga más o menos como siempre —con un Gobierno ni victorioso ni derrotado, la situación ni asentada ni caótica, el país ni en guerra ni en paz. «Algo así es lo que va a pasar», decía hace poco el hombre que pertenece a lo que él llama «la clase dirigente». «Y será lo mejor. Lo que la gente aquí no ha entendido es que esta guerra no es contra el narcotráfico sino contra los narcotraficantes —dos de ellos. Pero si salimos de Escobar y de

Rodríguez Gacha —y habrá que matarlos, porque si los capturan vivos las consecuencias serían muy sangrientas— todo podrá volver a ser como antes.»

«Ésta sería probablemente la solución más triste de todas», dijo el decano de la facultad de derecho. «Significaría que Colombia ha vuelto a demostrar su capacidad de adaptarse a cualquier cosa.»



Hace dos domingos hubo una bomba en una de las principales avenidas, a la altura de una zona residencial de la clase media alta. No fue nada fuera de lo común —apenas una de las cuarenta y tantas explosiones de las últimas tres semanas. Lo asombroso fue que la bomba estalló casi exactamente en el mismo lugar en que un carrobomba casi mató al general Maza Márquez, director del DAS, en mayo. La explosión del carrobomba abrió en el pavimento un cráter de 5 metros de ancho, mató a 6 personas y dejó heridas a más de 50, destruyó casi todas las ventanas en dos cuadras a la redonda y aterrizó completamente a los residentes de los altos edificios de apartamentos en la carrera Séptima. Golpear dos veces en el mismo sitio es un acto vil, incluso para un narco, pero así fue, y ahí estaban los vidrios rotos desparramados por la calle, la fachada derruida de una agencia de viajes en la esquina donde colocaron la bomba, las parpadeantes luces rojas y el chillido atroz de los carros de policía, y de nuevo los vecinos atónitos temblando en la acera, mirando a ninguna parte.

Pero se estaban acostumbrando, dijeron. Enrique Sánchez y su mujer —dos muchachos que escasamente parecían en edad de casarse— dijeron que sólo dos semanas antes habían ido a pasear por Chapinero, un distrito comercial cercano, y que habían llegado a casa justo a tiempo para oír una explosión en la esquina por donde acababan de pasar. «Íbamos en el ascensor y se sacudió», dijo con una risita la

señora Sánchez. El jueves anterior había habido otra bomba y también la habían oído. Enrique Sánchez dijo que las explosiones eran apenas la mitad del cuento. «Salí a dar una vuelta la otra noche y el ejército me detuvo; dijeron que parecía de los que ponen bombas. Y ayer me pararon porque manejo un jeep, como que los narcotraficantes andan en unos parecidos. Me pidieron mis documentos y vieron que había nacido en Pacho —el pueblo donde es más fuerte Rodríguez Gacha—; me interrogaron durante dos horas. ¡Figúrese! ¡Padecemos las bombas y creen que somos los que las ponemos!»

Su mujer, a quien todo esto le parecía muy divertido, lo abrazó fuerte.

Les pregunté cómo habían reaccionado ante la última bomba, la que había estallado hacía unos pocos minutos, virtualmente en sus narices. «La verdad, no es para tanto», dijo ella. «Cuando pasa la explosión, todo sigue tranquilo.»

*Publicación original: 16 de octubre de 1989
en The New Yorker*